

La legitimidad democrática y el futuro de Venezuela

Arturo Sosa A., s.j. *



El foco de esta reflexión es el papel de la democracia en el futuro que estamos proponiendo para la sociedad venezolana. Por tanto, la pregunta ¿a dónde vamos como sociedad venezolana? hay que formularla con mayor precisión: ¿estamos los venezolanos en el camino de construir una legitimidad democrática?

A dónde vamos como sociedad venezolana?, es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Una pregunta que puede hacerse desde perspectivas muy diferentes. Una de ellas es la política, a saber, poniendo de manifiesto el tipo de fines y medios que se plantean a través de las decisiones que van tomando los distintos actores de las relaciones de poder en lo que se refiere a uno de los asuntos comunes o públicos más importantes de cara al futuro, la democracia en las relaciones constitutivas de la sociedad venezolana.

Uno de mis maestros en la vida, ya desaparecido, afirmaba con frecuencia que las personas hablan mucho de aquello de lo que carecen. En los últimos años democracia y legitimidad han sido conceptos permanentes en la boca de los venezolanos. Todos los grupos de todas las tendencias y posiciones vuelven una y otra vez sobre ellos. Los últimos años de la vida política venezolana han estado llenos de procesos electorales, discusiones públicas y privadas, tensiones de todo calibre... en los que se ha encubierto la lucha por el poder político detrás de una pretendida lucha por la legitimidad democrática.

¿A dónde vamos?, no es una pregunta sencilla desde el punto de vista político. Lleva implícita otras preguntas, también de orden político, de cuya respuesta depende una respuesta significativa. Entre

esas preguntas están las que se refieren, en primer lugar, a la visión de futuro de la sociedad que pueda y quiera ser compartida; en segundo lugar a la memoria histórica que conservamos y queremos conservar como pueblo; en tercer lugar a las opciones básicas sobre las características del régimen político que se pretende construir para hacer realidad esa visión compartida de futuro; en cuarto lugar, a quiénes se reconoce como actores sociales de la toma de decisiones y conducción del proceso político, es decir, actores de las relaciones de poder. El foco de esta reflexión es el papel de la democracia en el futuro que estamos proponiendo para la sociedad venezolana. Por tanto, la pregunta hay que formularla con mayor precisión: ¿estamos los venezolanos en el camino de construir una legitimidad democrática?

El pueblo no es monolítico, ni monocolor, ni portador de una sola idea o proyecto común. El pueblo es la expresión organizada de la riqueza que constituye la variedad cultural, étnica, ideológica y de intereses de una sociedad. Por tanto, es evidente que se desvirtúa la democracia cuando algún actor, por su cuenta, se abroga el derecho a hablar en nombre del pueblo, o pretende representarlo, como su única y genuina expresión.

Cuando la mayoría se comporta como totalidad, es decir, prescindiendo de la existencia de las minorías, con la excusa que sea, el régimen político deja de ser democrático para convertirse en totalitario, aunque, por la fuerza, ostente títulos democráticos.

Legitimidad y democracia

Se abusa de ambas palabras al punto de asociar legitimidad a caudal electoral y democracia a movilización de masas, cuya participación consiste apenas en aclamar al liderazgo movilizador y el proyecto social que supuestamente encarna. Usar los conceptos de legitimidad y democracia en forma tan simplista contribuye más a oscurecer que a aclarar la realidad política que se analiza o interpreta.

La legitimidad es un concepto complejo y difícil de asir. La legitimidad es consecuencia de la existencia de consensos básicos que hagan posible la vida en sociedad de seres humanos libres. Consensos que se refieren al carácter mismo de esa vida social, al horizonte al que orientan sus acciones y a los procedimientos de su quehacer cotidiano. Por analogía, puede afirmarse que la legitimidad es a la sociedad lo que la conciencia al individuo. Garantizar la legitimidad de una sociedad constituye el mayor desafío de la acción política de sus ciudadanos y sus instituciones.

La legitimidad no es automáticamente democrática. La historia humana ha conocido una gran variedad de regímenes políticos con un alto grado de legitimidad sin relación alguna con la democracia. Recordemos, por ejemplo, las antiguas monarquías del hoy llamado Medio Oriente o de la Europa Medieval. La tradición política republicana conoce formas políticas no democráticas como legítimas. Tal es el caso de la tiranía en algunos momentos de la historia grecorromana. La historia europea y latinoamericana del siglo XX conoce numerosos ejemplos de regímenes autoritarios, de derecha y de izquierda, aceptados como legítimos, incluso avalados por un ingente número de votos, sin presencia de relaciones políticas propiamente democráticas. Por consiguiente, la legitimidad democrática no puede medirse exclusivamente por la existencia de procesos de votación, por el número de votos o por la eficiencia en la aplicación de las políticas sociales de un determinado gobernante. La legitimidad democrática proviene de la presencia real

de los principios, valores y comportamientos que definen a la democracia en los consensos básicos de la sociedad.

La democracia es un modo de tomar decisiones políticas y ponerlas en práctica en sociedades conscientes de la complejidad de las relaciones que la conforman. El modo democrático de tomar decisiones reconoce, en primer lugar, el lazo indisoluble entre ética y política, por el cual se reconoce a la persona como sujeto libre de las decisiones públicas o privadas y se impulsa a que la acción política se oriente a propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad. Esto significa el reconocimiento sincero de la diversidad de actores políticos en la vida democrática, por tanto, la presencia legítima de intereses diversos, contrarios y contradictorios, como dimensión normal de la vida social. Al mismo tiempo reconoce la pluralidad cultural, la variedad de opiniones y el debate público de las ideas.

La democracia propicia un ejercicio desconcentrado del poder político a través de la separación y contrapeso de las instituciones públicas e instrumentos de poder. Para la democracia, el diálogo y la negociación son los medios básicos para tomar decisiones políticas y rechaza expresamente la imposición de decisiones por la fuerza. La guerra, en cualquiera de sus formas o justificaciones es antidemocrática.

Diálogo y negociación

En Venezuela actualmente se habla mucho de diálogo y nada de negociación. Del diálogo se habla, pero no se hace más allá de permitir que cada quién se exprese a su aire y diga que respeta la opinión del otro, por tanto exige que la suya sea respetada. Conocer las opiniones de todos los actores y respetar su expresión es una condición para el diálogo, pero no es dialogar. Forma parte del flujo de información honesta y completa que necesitan los ciudadanos como materia prima para la participación responsable en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, se requiere del debate, el intercambio, o sea, el diálogo que

prepara la negociación a través de la cual se alcanzan las decisiones en función del bien común.

El debate, forma clásica del diálogo político, tampoco se hace en la Venezuela presente. El debate se confunde con una situación en la que cada uno pretende convencer al otro de la posición que sostiene, generalmente sin más éxito que confirmar al interlocutor en sus propias convicciones. Entre nosotros, el debate de ideas encuentra poquísimos espacios incluso entre quienes dicen tenerlo como profesión. La condición indispensable para debatir y dialogar es la existencia de interlocutores, es decir, reconocer a los participantes en el diálogo al mismo nivel, tomar conciencia de lo relativo del propio pensamiento u opinión y aceptar la posibilidad de que otros actores tengan la capacidad de aportar algo nuevo al conocimiento o percepción de la realidad desde la que se parte. Tener interlocutores supone capacidad de escuchar, no solo de oír y de expresar sinceramente lo que se tiene dentro, no sólo de discursar.

La negociación es más compleja que el diálogo y necesaria para la vida en común al modo democrático. Es la verdadera sustitución de la guerra o la fuerza como el modo de imponer la decisión de una parte sobre la otra. Desde una perspectiva política y democrática nada más falso que concebir la guerra como la continuación de la política por otros medios. La guerra es la sustitución de la política por la imposición forzada y la sustitución de la humanidad por la inhumanidad.

La negociación añade al reconocimiento de los actores como interlocutores que se expresan con sinceridad, escuchan con atención y aprenden unos de otros, la flexibilidad para ceder en las posiciones iniciales, para ceder en los intereses particulares y establecer alianzas que permitan alcanzar un terreno común, un interés público, tan altamente valorado por cada uno de los actores que lo motiva posponer o sustituir la realización de sus intereses particulares a fin de garantizar el interés público. Es a través de la negociación que se hace posible establecer los principios básicos de unas relaciones en

las que sea posible la convivencia entre intereses variados, contrarios y contradictorios, en función de intereses reconocidos como comunes o públicos.

Legitimidad democrática, pueblo, mayoría y minoría

La misma palabra democracia señala al pueblo como sujeto del régimen político y de la forma de gobierno que se pretende. Pueblo es otra expresión usada y abusada en la Venezuela de hoy. Desde el punto de vista político el pueblo está formado por los ciudadanos, a saber, aquellos miembros de la sociedad capaces de hacer suyos los intereses públicos tanto como los suyos particulares. El pueblo toma cuerpo en sus organizaciones propias, independientes del Estado, a través de las cuales se gestiona la participación en las decisiones públicas y el control sobre el ejercicio del poder político. Si no está organizado, el pueblo no existe como actor político de la democracia. Las formas de organización popular son tan variadas como la complejidad de intereses existentes en la sociedad. También la incidencia pública de las organizaciones de ciudadanos es diversa. Los partidos políticos y todas aquellas agrupaciones que se constituyen para participar directamente en la vida pública, incluso para ejercer el poder político son necesarios en la vida democrática.

En teoría política el concepto de pueblo puede asociarse al de sociedad civil en cuanto ésta reúne a los ciudadanos en el proceso de definir los objetivos políticos de la sociedad y en la definición de los instrumentos para hacerlos realidad, así como en la formulación de las políticas públicas y la supervisión de su puesta en práctica. Pueblo y Sociedad Civil son conceptos plurales aunque se usen en singular. El pueblo no es monolítico, ni monocolor, ni portador de una sola idea o proyecto común. El pueblo es la expresión organizada de la riqueza que constituye la variedad cultural, étnica, ideológica y de intereses de una sociedad. Por tanto, es evidente que se desvirtúa la democracia cuando algún actor, por su

cuenta, se abroga el derecho a hablar en nombre del pueblo, o pretende representarlo, como su única y genuina expresión.

La historia política venezolana está llena de ejemplos de apropiación indebida de los conceptos de pueblo y de sociedad civil. Los positivistas asociaron el pueblo al dictador considerado como el "césar democrático", necesario como garantía de los verdaderos intereses populares. La tradición leninista asimilada por los partidos políticos venezolanos sustituyó al pueblo por el partido, el partido por su cúpula y su cúpula por el líder máximo. En los últimos años, el chavismo está convirtiendo al pueblo en un actor inasible, sólo se expresa a través de la palabra del líder y su proyecto. El lenguaje radical-revolucionario que sustituye nuevamente el gobierno del pueblo (democracia) por el gobierno del líder "para" el pueblo. Mientras tanto la "oposición" al chavismo se apodera del concepto de sociedad civil, sustituyendo a la ciudadanía formada por todos los miembros de la sociedad por el grupo de quienes combaten a quienes hoy detentan y ejercen el poder político.

En democracia las funciones públicas no se ejercen por atributos personales o hereditarios ni en forma indefinida. La democracia establece una legalidad en cuyas normas se regula la forma de alterabilidad en el ejercicio de la función pública y las formas como quienes la ejercen rinden cuenta periódica a la sociedad. El ejercicio de cualquier función pública en democracia es una forma de servicio al pueblo y quien la realiza es responsable ante sus con-ciudadanos.

Aunque en democracia se toman las decisiones por mayoría, las minorías forman parte indispensable tanto del proceso de negociación para llegar a ellas como del contrapeso necesario para ponerlas en práctica. Cuando la mayoría se comporta como totalidad, es decir, prescindiendo de la existencia de las minorías, con la excusa que sea, el régimen político deja de ser democrático para convertirse en totalitario, aunque, por la fuerza, ostente títulos democráticos.

El reconocimiento de las minorías y su inclusión en los procesos de toma de decisiones públicas forman parte sustancial de la democracia. Prescindir de las minorías por ser tales o excluirlas sutil o descaradamente hace imposible la legitimidad democrática. La imposición aplastante de la mayoría sobre las minorías, como conducta constante en nuestra historia política, insensibiliza frente a este aspecto tan propio de la democracia: que las minorías tengan espacio y oxígeno dentro del sistema de toma de decisiones.

Un Estado democráticamente diseñado encarna en sus instituciones la garantía de la desconcentración del poder político así como los necesarios controles y contrapesos que permitan a la ciudadanía tener control sobre el Estado y no al revés.

Gobierno y oposición no son mecánicamente expresión de la mayoría y la minoría. En sociedades complejas y democráticas el juego político es bastante más variado y complicado. Empezando por recordar que el gobierno es apenas una de las funciones públicas que realiza el Estado, principal instrumento de poder en esta época histórica. A través del Estado y su diversidad de funciones las sociedades democráticas establecen la forma de plasmar en la Ley los principios básicos de la vida en común y las instituciones a través de las cuales establecer y realizar las políticas públicas orientadas a la realización de los objetivos de la sociedad. Un Estado democráticamente diseñado encarna en sus instituciones la garantía de la desconcentración del poder político así como los necesarios controles y contrapesos que permitan a la ciudadanía tener control sobre el Estado y no al revés. El binomio gobierno-oposición es una manera extremadamente simple de expresar la necesidad de balances y con-

trapesos en la democracia. La democracia propia de sociedades complejas se debate entre alternativas políticas reales, capaces de establecer una comunicación con la sociedad que le permita a esta elegir a quienes mejor la conduzcan por el camino deseado por el conjunto.

La efectividad en la solución de los problemas sociales es uno de los elementos que conforman la legitimidad de un régimen político. Si se toma como el único criterio de legitimación política es posible que algunas autocracias o totalitarismos, en el corto plazo, alcancen legitimidad por la capacidad de atender los problemas de los más pobres en sociedades muy desiguales y de bajo desarrollo humano. La legitimidad democrática tiene como elemento sustancial la garantía del espacio necesario para el ejercicio de la libertad humana. Sin posibilidad de vivir como seres libres no es posible una sociedad democrática legítima. Lo que mejor define a un ser humano es su libertad y la política es el espacio privilegiado para su ejercicio puesto que supone crear el espacio público en el que se garantice la libertad a todos y no sólo a algunos porque detentan el poder. La solución de los problemas sociales se convierte en objetivo de la democracia como condición de su existencia. La desigualdad social y la pobreza disminuyen las posibilidades de ejercicio de la libertad. Es en democracia que puede vivirse el proceso de superación de la pobreza y las desigualdades como proceso de liberación.

La legitimidad democrática en un mundo en veloz proceso de globalización asimétrica obliga a incluir en la visualización de los intereses públicos de una sociedad aquellos que hagan posible la vida en común de todos los pueblos en el planeta. El grado de complejidad del proceso de articular intereses para garantizar la vida política democrática de todos los seres humanos, sus culturas y naciones en el mundo contemporáneo es muy superior al de las épocas precedentes. De alguna manera obliga a un replanteamiento de lo político desde la perspectiva del conjunto de la humanidad. El espacio público

abarca hoy a todo el planeta y los intereses comunes incluyen los de todos los seres humanos que lo habitan. La democracia como característica de gobierno del mundo en proceso de globalización representa uno de los mayores desafíos de la historia humana.

Abrirle camino a la legitimidad democrática

La palabra democracia la encontramos presente en el lenguaje político a través del cual se ha buscado contribuir a la legitimidad de los regímenes establecidos en Venezuela a partir de la ruptura de los nexos con el poder colonial español. En gran parte por contraponer la legitimidad política americana a la monarquía, después de haber vivido más de trescientos años bajo un régimen monárquico, y estar asociada la democracia republicana a los nuevos tiempos marcados por la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos de América y la modernización de las sociedades de esta parte del mundo.

Hasta bien avanzado el siglo XX, de mano de la concepción positivista, la palabra democracia estuvo asociada al dominio de dictadores como Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez quienes transmitieron ese poder al Ejército que ejerció el poder bajo los mandatos de los Generales Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita y Marcos Pérez Jiménez. Los gobiernos mencionados gozaron de suficiente legitimidad para mantenerse en el ejercicio del poder político, lo cual no quiere decir que su legitimidad pueda considerarse democrática en el sentido expresado más arriba.

El intento de establecer un régimen democrático entre 1945 y 1948 no alcanzó suficiente legitimidad entre otras razones por la incapacidad de reconocer y garantizarle el espacio a todos los actores sociales, además de no haber logrado un adecuado clima de diálogo y haber impedido una auténtica negociación social. La ilusión de derivar la legitimidad democrática exclusivamente de los votos, por numerosos que fueran, contribuyó

a descuidar el cultivo de las características necesarias para iniciar un régimen democrático sobre bases sólidas.

El gobierno encabezado por el Coronel, luego ascendido a General, Marcos Pérez Jiménez, sustentado en las Fuerzas Armadas, llegó a alcanzar un grado importante de legitimidad política, pero nunca tuvo legitimidad democrática, a pesar de los esfuerzos de la ideología oficial (Nuevo Ideal Nacional) para convencer a la sociedad venezolana y al mundo de que se caminaba en esa dirección. Ni la transición inicial encabezada por las Juntas de Gobierno presididas por el Coronel Carlos Delgado Chalbaud y el Dr. Germán Suárez Flamerich, ni la elección de una Asamblea Constituyente en 1952, ni el plebiscito reeleccionista de diciembre de 1957, pudieron tejer un velo encubridor al falso discurso democrático y electoral del régimen dictatorial de los militares, a pesar de los logros en el proyecto de la modernización de Venezuela.

En el actual momento de Venezuela se abusa exageradamente del discurso sobre las limitaciones democráticas del sistema de partidos políticos y conciliación de élites que caracterizó la historia política entre 1958 y 1998. Seguir responsabilizando esa etapa de la historia de todo lo que sucede en la política venezolana actual resulta cansón e inútil, tanto desde el punto de vista analítico como práctico. Desconocer simplistamente la complejidad de las décadas que sucedieron al derrocamiento de la dictadura encabezada por el General Marcos Pérez Jiménez en nada contribuye a recorrer el camino para alcanzar una legitimidad democrática.

A partir de 1958 la sociedad venezolana se propuso seriamente avanzar hacia la democracia y se dieron importantes pasos en el camino de la legitimidad democrática. El Pacto de Punto Fijo, del cual pretende hacerse una caricatura, constituye uno de los esfuerzos más importantes de la historia política venezolana de construir la legitimidad democrática a través del diálogo y la negociación. Reconocer las evidentes limitaciones políticas del pacto de Punto Fijo,

como la exclusión de los comunistas por su ideología, así como la permanencia de los militares en la deliberación política y en la toma de decisiones gubernamentales de alto nivel, no debe hacernos cerrar los ojos a la importancia que significó en el terreno de avanzar en la capacidad de dialogar y negociar políticamente. El proceso posterior, conocido como de "pacificación", cobra un importante sentido democrático, al ser derrotada la vía de las armas para lograr la inclusión de los actores excluidos en la primera década de esta etapa.

En este momento surgieron organizaciones sociales, vecinales, sindicales, empresariales, estudiantiles, culturales, etc. Los partidos políticos tuvieron un importante papel en su impulso. También fueron ellos los responsables de crear tensión entre la independencia propia de las organizaciones en los distintos ámbitos de la vida ciudadana y su subordinación a los objetivos partidistas. Pocas organizaciones fueron capaces de desarrollarse por su cuenta, sin convertirse en "correas de transmisión" entre la sociedad y alguno de los partidos, con la consecuente dificultad para desarrollar la conciencia ciudadana más allá de la militancia partidista.

Los procesos electorales se convirtieron en un sostenido apoyo de la población al camino democrático. La constante elección de la vía electoral sobre las propuestas armadas de distinto signo (golpistas, guerrilla) y la participación masiva de la población fueron generando conciencia democrática. El modelo electoral que se adoptó sirvió, al mismo tiempo, para reforzar el papel de los partidos políticos como mediadores exclusivos entre la sociedad, el Estado y el Gobierno.

El sistema de partidos políticos y conciliación de élites se diseñó para lograr el apoyo de todos los sectores sociales, a través de los partidos políticos, a las decisiones tomadas por las élites comprometidas con el proceso de modernización. La legitimidad del régimen se asoció a la convicción, profundamente arraigada en la sociedad y avalada por todas las ideologías presentes en el debate político ve-

El Pacto de Punto Fijo, del cual pretende hacerse una caricatura, constituye uno de los esfuerzos más importantes de la historia política venezolana de construir la legitimidad democrática a través del diálogo y la negociación.

La legitimidad de los gobiernos y regímenes políticos ha estado asociada desde entonces (1925) tanto al flujo de la renta petrolera como al modo de distribuirla socialmente por parte del Estado. Un ingreso de esta naturaleza y magnitud no podía sino reforzar la concentración del poder en el vértice de la pirámide centralista de la estructura del Estado venezolano.

nezolano, de la necesidad de la modernización como una etapa en la que todos los miembros de la sociedad mejorarían su calidad de vida y el país entraría a formar parte de las naciones desarrolladas del mundo.

La conciliación de élites logró el espacio público necesario para el diálogo y la negociación que permitieron los consensos básicos de un régimen político orientado por el camino democrático. Los partidos políticos tomaron para sí el papel de articular los intereses de la variedad de sectores sociales presentes en el proceso venezolano. La

legitimidad democrática se iría consolidando en la medida en que se ampliara la participación de los actores sociales en la vida política. El sistema de conciliación de élites perdió, poco a poco, su conciencia de transitoriedad como régimen político y pretendió perpetuarse en el tiempo. De ser un canal de participación de la gente en la vida pública, se fue convirtiendo en un obstáculo a la presencia activa de la ciudadanía en un estilo de vida pública cada vez más democrático.

A esto ayudaron dos elementos característicos de la vida política venezolana de la primera mitad del siglo XX: el escaso desarrollo político del Estado y la dependencia de la renta petrolera. El Estado venezolano puede llamarse tal hacia la segunda década del siglo XX cuando logra realmente el control del territorio nacional y el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, es un Estado constituido sólo por el Gobierno, en las féreas manos de un dictador, con una estructura centralizada y centralista que concentra el poder en pocas instituciones, a saber, la Presidencia de la República y el Ejército. Desde entonces, el Estado venezolano ha conocido un importante desarrollo de sus instituciones y ha ido creciendo en su tamaño. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de descentralizar su estructura, ha prevalecido su carácter centralista y presidencialista.

Desde 1925 la renta petrolera ha sido el mayor ingreso del Estado venezolano. Una renta que, además, creció en proporciones importantes por lo menos hasta la nacionalización de la industria en 1975. La legitimidad de los gobiernos y regímenes políticos ha estado asociada desde entonces tanto al flujo de la renta petrolera como al modo de distribuirla socialmente por parte del Estado. Un ingreso de esta naturaleza y magnitud no podía sino reforzar la concentración del poder en el vértice de la pirámide centralista de la estructura del Estado venezolano.

La nacionalización de la industria petrolera lejos de disminuir la visión rentista de la relación recurso natural-Estado-sociedad, la reforzó. Crea una contradicción in-

terna dentro del Estado que debe, al mismo tiempo, mantener el flujo de renta necesario para sostener su modelo de relación con la sociedad y manejar eficientemente la industria petrolera estatal de modo que pudiera sustituirse la relación rentista por una productiva. A esto se añade la imposibilidad de seguir fundando el gasto público y el desarrollo del país en los ingresos petroleros. Por una parte, debido al crecimiento de la demanda social al gasto público y los requerimientos de inversión pública y privada de un desarrollo nacional sano. Por otra parte, a causa de la disminución real de la renta per cápita desde 1979 hasta nuestros días. La realidad de la disminución de la renta petrolera per cápita no ha querido ser percibida por la mayoría de la sociedad venezolana que prefiere agarrarse del mito de la difícil existencia de una riqueza petrolera inextinguible, reforzada por el aumento de los precios de los últimos años y su consiguiente aumento de los ingresos estatales.

La abundancia de renta en manos del Estado hizo posible que Venezuela experimentara un proceso populista exitoso, motorizado por los partidos democráticos y policlasistas. En toda América Latina los movimientos populistas fueron, además de alternativas reales a la gestión política de los militares, un importante impulso a la modernización de sus países y a la democracia como dimensión de una sociedad moderna. A la vista de la historia de Venezuela y América Latina es injusto identificar populismo y demagogia como se hace habitualmente hoy. Los movimientos populistas fueron una importante escuela de participación política, organización popular y aprendizaje democrático para millones de indígenas, campesinos, obreros, habitantes de los barrios suburbanos, estudiantes, amas de casa, profesionales y técnicos de los sectores sociales medios, e incluso miembros de los sectores privilegiados de la sociedad.

En la experiencia venezolana, el populismo rentista, es decir, el manejo de recursos públicos abundantes, provenientes de la venta de

un recurso natural no renovable, hizo posible el proyecto modernizador minimizando el conflicto entre el campo y la ciudad, permitiendo la participación de amplios sectores sociales en la vida política. Históricamente, el populismo ha sido eficaz en los momentos de iniciar la modernización de sociedades rurales. Una vez avanzada la urbanización propia de los procesos modernizadores, el populismo, como estilo político, tiende a convertirse en demagogia, manipulación de los sectores pobres por las élites partidistas, militares o económicas, dando lugar a relaciones puramente clientelares que a su vez hacen a la población dependiente de los grupos de poder.

Ese es el caso de los partidos populistas venezolanos que, en un primer momento, fueron capaces de movilizar las poblaciones campesinas y urbanas, promover organizaciones en muchos espacios sociales, formar sistemáticamente a centenares de miles de militantes y dirigentes favoreciendo la expansión de una cultura democrática en buena parte de la población. Después, sin embargo, pasaron a ser redes de control sobre la sociedad, dedicados a filtrar sus demandas y condicionar la distribución de los recursos públicos, dejando la función de articular intereses, mediar la negociación política, escrutar alternativas al populismo rentista o formar ciudadanos comprometidos en la búsqueda del bien común. Los partidos dejaron de contribuir eficientemente a la maduración de la legitimidad democrática una vez superada su etapa populista o de movilización social.

Estas señales fueron percibidas a tiempo por la sociedad venezolana. Personas y grupos conscientes, de todos los estratos sociales, ideologías, fuera y dentro de los partidos, captaron las señales de alarma, advirtieron y ofrecieron líneas para evitar el deterioro de la legitimidad democrática a través de la profundización de la democracia y la justicia social. El mayor esfuerzo en esta dirección fue el proceso conocido como "reforma del Estado", a través del cual se realizó un amplio diálogo de todos los sectores de la sociedad, se pro-

dujo un diagnóstico acertado del momento del régimen de partidos políticos y conciliación de élites y se hicieron propuestas para dar pasos hacia la profundización de la democracia. Tales propuestas abarcaron todas las dimensiones de la vida social. Estaban orientadas a la superación del esquema rentista del Estado, a su descentralización política y administrativa, así como a la desconcentración del poder político, fundamentalmente a través del fortalecimiento de la sociedad civil, posibilitando la participación organizada del pueblo en la toma de decisiones cotidianas de la vida pública.

Hubo diálogo pero no se alcanzó la negociación necesaria para superar los síntomas de la crisis y profundizar la democracia. Avances como la elección directa de los gobernadores de los Estados y los Alcaldes o la descentralización de algunas funciones del Estado no fueron suficientes para provocar la superación de las limitaciones del sistema de partidos y conciliación de élites. El pueblo no se sintió escuchado ni se abrieron auténticas alternativas políticas más democráticas.

Una crisis de legitimidad democrática

La crisis política cuyos primeros signos se remontan a 1975 y estalló entre 1989 y 1992 es una crisis de legitimidad democrática. Los consensos básicos sobre los que se fundó el régimen de partidos y conciliación de élites perdieron vigencia. El desarrollo político de la sociedad venezolana no podía contenerse dentro de los límites de las relaciones políticas hasta entonces existentes. Los avatares de la economía, el retroceso en la calidad de vida de las mayorías, afectadas por un inexplicable proceso de empobrecimiento, la corrupción reinante en todas las esferas de la actividad pública, etc., fueron factores influyentes en la situación que se vive, sin embargo, siguiendo el foco de este análisis, la quiebra de la legitimidad democrática es la razón de fondo de una crisis que no ha sido aún superada.

La protesta popular de febrero de 1989 y los golpes militares de

1992 fueron las más clamorosas señales del descontento político existente. No hubo oídos para ese descontento por las élites sociales y políticas. La sociedad civil no había alcanzado la madurez suficiente para producir alternativas de organización política para sustituir a las existentes, a pesar de su fuerte compromiso con la democracia y la convicción arraigada de la posibilidad de hacer cambios profundos en la vida política nacional por la vía democrática.

Durante este período se llegó a hacer un planteamiento de fondo, a saber, echar a andar un proceso constituyente a través del cual se abriera un amplio espacio de diálogo y negociación que culminara en una Asamblea Constituyente, lo suficientemente plural como para poder expresar en una nueva Constitución los acuerdos básicos en los que se fundaría la legitimidad democrática de la nueva etapa política del país.

Las elecciones de 1998 fueron una nueva expresión del quiebre de los consensos básicos de la vida política venezolana, al mismo tiempo que la confirmación de la preferencia por la vía democrática. La elección del Teniente Coronel (Ej.) Hugo Chávez Frías, imagen del golpe militar de febrero de 1992, constituyó un alarido político de la ciudadanía. La votación que dio el triunfo a Hugo Chávez estuvo constituida por un grupo consciente de apoyar un proyecto revolucionario que nunca ocultó y, otro grupo, más grande aún, que vio la posibilidad de sacar de la escena a los partidos políticos, percibidos como los principales responsables de los defectos del régimen político de conciliación de élites, la crisis de legitimidad democrática y rechazados como los mediadores de la articulación de los intereses públicos y privados. El chavismo supo recoger ese sentimiento mayoritario de la población y sumar los votos para alcanzar el ejercicio del gobierno, sin renunciar a su proyecto original, pero sin negociarlo con los demás actores que lo apoyaron electoralmente de forma que pudiera convertirse en el consenso básico de la legitimidad política.

Aprovechando esa ambigüedad y la popularidad conseguida durante los años anteriores, el chavismo convoca una Asamblea Constituyente sin vincularla a un proceso constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, reunida en 1999, sacrifica el proceso constituyente, es decir, la negociación inclusiva de todos los actores sociales, con la pluralidad propia de la sociedad venezolana a finales del siglo XX, para imponer, a través de la mayoría lograda en ella, un texto constitucional apenas expresión de una parte de la socie-



En toda América Latina los movimientos populistas fueron, además de alternativas reales a la gestión política de los militares, un importante impulso a la modernización de sus países y a la democracia como dimensión de una sociedad moderna.

En la experiencia venezolana, el populismo rentista, es decir, el manejo de recursos públicos abundantes, provenientes de la venta de un recurso natural no renovable, hizo posible el proyecto modernizador minimizando el conflicto entre el campo y la ciudad, permitiendo la participación de amplios sectores sociales en la vida política.

dad, la que sintoniza con el proyecto bolivariano del chavismo.

Tanto el chavismo gobernante como los otros actores siguen hablando el lenguaje democrático comúnmente aceptado desde las décadas anteriores. Sin embargo, resulta cada vez más clara la ausencia de un proyecto compartido de país. Más bien, se pone de manifiesto la existencia de visiones contradictorias sobre el régimen político que se pretende implantar en sustitución del sistema de partidos políticos y conciliación de élites. El resultado ha sido una sociedad polarizada, atrapada en una lu-

La polarización es el triunfo de la lógica "fundamentalista" presente en cualquier posición ante la realidad. La lógica fundamentalista es dicotómica, no admite grados ni excepciones. Es una lógica que lleva no sólo a mirar la realidad de una sola manera sino pretende la imposibilidad de otra mirada. De la lógica fundamentalista se deriva la imposibilidad del reconocimiento a cualquier posición alterna, por tanto pierde todo sentido la comunicación, el diálogo y la negociación. La historia es rica en demostrar cómo se cuele esta lógica intolerante desde cualquier posición o área del actuar humano. Las religiones lo han hecho y lo hacen "en nombre de dios", las culturas lo han hecho y lo hacen en nombre de la verdadera y única humanidad, los científicos en nombre del saber y así sucesivamente.

Si esta lógica se apodera de la política, se llega a la necesidad de reprimir la disidencia y convertir el ejercicio del poder en un escenario en el que no se admite la diversidad de opiniones sino la existencia de adversarios, enemigos a ser combatidos y vencidos. La polarización es un inmenso obstáculo en el camino de la legitimidad democrática. En una sociedad polarizada, utilizar el lenguaje de gobierno y oposición no tiene sentido; lo que está en juego son diferencias sustantivas de enfoque sobre el régimen político del país que se perciben incompatibles entre sí, por lo que cada uno de los polos orienta su estrategia a la desaparición política del otro, posponiendo indefinidamente la creación de las condiciones para una negociación democrática.

La lucha por el poder político es también una lucha por la legitimidad. El chavismo ha ido construyendo su legitimidad sobre una hábil utilización de la cultura política del populismo rentista que le permite una inmediata conexión con los sectores populares. Esa efectiva comunicación, hecha directamente por el líder del proyecto, Hugo Chávez, ha calado hondo en una buena parte de la población. Por una parte, se basa en un discurso nacionalista, patriótico, bolivariano, anti-imperialista, pro-

visto de una lectura muy particular de la historia política venezolana, que conecta con los mitos originales de la identidad venezolana. Por otra, es un discurso muy directo, casi personalizado, que dice lo que la gente quiere oír, alimenta altas expectativas respecto de la acción de gobierno en beneficio de los sectores de menores recursos. Los recursos reales de la renta petrolera, gracias al comportamiento internacional de los precios del petróleo, le ha permitido avalar ese discurso con programas de vasto alcance social como las "misiones" en los sectores más sensibles para las mayorías (alimentación, salud, vivienda, educación, empleo). Otro ingrediente de esta legitimidad es el fuerte apoyo de la Fuerza Armada y la constitución del Movimiento V República (MVR) como aparato político con presencia en todos los rincones del país, especialmente en los barrios y campos. Las libertades públicas, como la libertad de expresión, movimiento, organización, etc., han seguido existiendo, así como numerosos procesos de votación tanto locales, regionales, como nacionales para elegir cargos o para hacer consultas (referenda), son otros factores que convergen hacia la legitimidad del régimen en el poder.

El chavismo está intentando adquirir una legitimidad revolucionaria. Busca darle carta de ciudadanía al proyecto de país *sui generis* que empezó a gestarse en la juventud de Hugo Chávez y sus compañeros militares, en alianza con otros sectores de la izquierda política nacional e internacional, inicialmente denominado *bolivariano* y más recientemente *socialismo del siglo XXI*. Aunque no hay una formulación única del proyecto, hay una serie de características que permiten dibujarlo: en primer lugar, el papel preponderante que tiene el Estado en todos los aspectos de la vida social. Un Estado bajo control directo del poder ejecutivo y centralizado, en manos del presidente de la República. En segundo lugar, tratándose de un Estado con una fuente de recursos independiente tan importante como la renta petrolera, está en capacidad de intervenir en la economía hacia

Los partidos populistas venezolanos dejaron de contribuir eficientemente a la maduración de la legitimidad democrática una vez superada su etapa populista o de movilización social.

La crisis política cuyos primeros signos se remontan a 1975 y estalló entre 1989 y 1992 es una crisis de legitimidad democrática. Los consensos básicos sobre los que se fundó el régimen de partidos y conciliación de élites perdieron vigencia.

cha descarnada por el poder político. A la vuelta de siete años el chavismo ha logrado acumular suficiente poder político para controlar las instituciones del Estado y del Gobierno, principales instrumentos de poder en la sociedad.

La polarización es una presión casi insoportable a recubrir la inabarcable complejidad de la realidad humana con preguntas simples, destinadas a provocar respuestas monocolors. Aunque la mirada más sencilla a la realidad revela su diversidad y policromía, las representaciones simplificadoras y unicolores, producidas por las miradas polarizadas, terminan siendo aceptables para grandes grupos de personas, sin importar su condición social o grado de educación.

el modelo de desarrollo endógeno que proclama, favoreciendo experiencias de co-gestión para las grandes empresas, cooperativas y empresas de producción social en el terreno de la mediana y pequeña actividad industrial o agropecuaria. En tercer lugar, el preponderante papel de la Fuerza Armada en el diseño y ejecución de las principales políticas públicas, con una estructura que favorece el control directo del Comandante en Jefe, presidente de la República. En cuarto lugar, una organización política con una amplia base social, en cuya cúspide se coloca el líder del proyecto, con una pronunciada imagen personalista. En quinto lugar, un discurso internacional democrático, nacionalista, integracionista, anticapitalista, antiglobalizador y tercermundista.

La legitimidad revolucionaria se va consolidando al convertirse el proyecto chavista en la única alternativa políticamente existente, convirtiendo así las votaciones en un acto de apoyo o resistencia a la persona de Hugo Chávez y su proyecto, con sus aliados subordinados a la conveniencia del propio proyecto.

Recuperar el camino de la legitimidad democrática

Los efectos de la polarización en una sociedad escasamente politizada y en crisis de legitimidad democrática están siendo devastadores. Las posiciones tienden al fundamentalismo y al autismo político: cada actor ve sólo aquello que quiere ver. El camino que lleva en este momento la sociedad venezolana no conduce a la recuperación y fortalecimiento de una legitimidad democrática, mediante la profundización de la democracia en el sentido descrito al inicio de estas páginas.

La razón principal para llegar a esta conclusión es que la democracia sólo puede existir cuando en el espacio público hay lugar para todos los actores y todos se reconocen entre ellos como interlocutores válidos, se garantiza la existencia y participación de las minorías, así como la alternabilidad, la desconcentración del poder político, el balance y auto-

nomía funcional entre las instituciones que ejercen el poder público. En el proceso venezolano de los últimos cinco años la lucha se ha centrado en apuntalar o descabezar a Hugo Chávez y su proyecto. El chavismo busca hacerse legítimo fortaleciendo el proyecto que encarna. El antichavismo pretende debilitarlo hasta sustituirlo, haciéndolo desaparecer. Las dos estrategias se orientan a la exclusión del vencido (quítate tú, para ponerme yo). Ninguna de las dos vías lleva a la legitimidad democrática, por el contrario, nos alejan de ella.

La posibilidad de enrumbar los pasos de la sociedad venezolana hacia la consolidación de una legitimidad política democrática está, fundamentalmente, en el amplio sector que ha logrado mantenerse fuera de la polarización y de su lógica excluyente o de quienes desde los polos existentes logren superarla. Desde la confrontación, producto de posiciones polarizadas, es imposible enrumbarse hacia la legitimidad democrática.

Un paso necesario en la dirección señalada es fortalecer la ciudadanía de este sector de la sociedad. Junto con hacerse cargo de lo público como interés propio, el ciudadano es aquel que reconoce a los otros igualmente como ciudadanos con los que está dispuesto a dialogar, debatir y negociar a fin de articular los intereses particulares con los intereses colectivos y participar en la toma de las decisiones políticas a través de las distintas organizaciones del pueblo.

De los ciudadanos organizados surgirán alternativas políticas democráticas entre las que la sociedad elegirá la que mejor articule los intereses en ella existentes, en función de los intereses colectivos compartidos. En la formulación de las alternativas políticas juegan su papel los partidos y demás organizaciones con fines políticos. Su razón de ser es precisamente ofrecer posibilidades políticas reales, a través de proponer programas de gobierno y formar el equipo capaz de ejecutarlas, así como establecer la comunicación con el pueblo organizado para convencerlo de la opción que representan. A los partidos y organizaciones políticas, desde el

gobierno o fuera de él, desde las instituciones públicas y desde "la calle", les corresponde crear y mantener las condiciones para el diálogo, el debate y la negociación política. Son ellos los que pueden promover las alianzas políticas y sociales necesarias para alimentar y consolidar la legitimidad democrática.

Recuperar el camino de la legitimidad democrática requiere de una transición política cuyas condiciones no resultan nada fáciles de crear al comienzo de un año electoral percibido por los actores polarizados como el momento de una importante batalla para consolidar

Los efectos de la polarización en una sociedad escasamente politizada y en crisis de legitimidad democrática están siendo devastadores. Las posiciones tienden al fundamentalismo y al autismo político: cada actor ve sólo aquello que quiere ver.

su respectiva posición. Avanzar en esa dirección requiere hacer sentir con la fuerza que posee a los importantes sectores no polarizados de la sociedad venezolana a través de la proposición de una agenda sustantiva para el debate y la negociación que abarque desde los objetivos básicos de la sociedad futura que puedan ser compartidos por la sociedad, hasta los modos sociales de llevarlos a cabo, al mismo tiempo que se devuelve la confianza en los canales e instrumentos propios de la democracia.

Una agenda que no puede olvidar la dimensión internacional de la legitimidad democrática, desechando el apelo a lo internacional para apoyar o justificar unilateralmente alguna de las posiciones polarizadas, tomando conciencia del aporte que podemos hacer los venezolanos y los latinoamericanos a la democratización de las relaciones internacionales como requisito para asegurar un mundo más justo en el que quepamos todos por muchos siglos más.

(5 de enero de 2006)

*Dr. en Ciencias Políticas